

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA

FACTORS INFLUENCING THE INTRODUCTION AND IMPLEMENTATION OF THE SPANISH LAW ON DEPENDENCE

Sergio Gómez Gil (1)

(1) Centro de Mayores de Colmenar Viejo

Resumen: La literatura internacional en materia de implementación de políticas públicas propone tres factores fundamentales para su estudio: Las características del colectivo al que hacen referencia, la coordinación y cooperación en su implantación, y las distintas capacidades y voluntades de las unidades que componen la administración pública en el país que se aplican (en el caso de España Central, Autonómica y Local). Partiendo de esta premisa, este artículo pretende analizar la influencia de estos factores en la implantación de la Ley de Dependencia en España, estudiando las desigualdades regionales existentes entre las distintas Comunidades Autónomas.

Palabras Clave: Dependencia, Políticas públicas, Coordinación, Cooperación, Administración.

Abstract: The international literature on the implementation of public policies speaks of three main factors that must be studied: the characteristics of the group targetted by the policies, the degree of coordination and cooperation in the implementation of the policies, and the different capacities and priorities of the public administration units of the country in question (in the case of Spain these are the central, regional and local authorities). Using this premise as its point of departure, this article examines the introduction of the Spanish Law on People in Situations of Dependence, underlining the differences among the different autonomous communities.

Key Words: Dependence, Public Policy, Coordination, Cooperation, Administration.

| Recibido: 27/05/2013 | Revisado: 27/06/2013 | Aceptado: 30/07/2013 | Publicado: 30/09/2013 |

Correspondencia: Sergio Gómez Gil. Trabajador Social. Centro de Mayores de Colmenar Viejo.
C/ Paraguay s/n. Colmenar Viejo. Telf. 91 846 71 80. Email: sergio.gomez@colmenarviejo.com

Referencia normalizada: Gómez, S. (2013). Factores que influyen en la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia en España. *Trabajo Social Hoy* 70, 7-32

1. EXPERIENCIAS DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LAS DIFERENTES CCAA

Partiendo de los tres factores fundamentales para el estudio de las políticas públicas (Gómez, 2012: 7-30): 1. Las características del colectivo de personas en situación de dependencia, 2. La coordinación y cooperación en la implantación de las políticas públicas, y 3. La diferente capacidad y voluntad de la Administración Central, Autonómica y Local; se realizará un análisis descriptivo para explicar cómo ha sido la implantación de la Ley de Dependencia en España. Como nota aclaratoria señalar que los datos que se han utilizado para la elaboración del estudio corresponden al periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma (2007) y finales del año 2011.

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL COLECTIVO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

En este primer punto se pretende analizar el perfil de las personas susceptibles de acceder al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en España. Antes de la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, había una variada normativa en relación a las personas con discapacidad y personas con dependencia que abarcaba todos los ámbitos: social, sanitario, educación, y el relacionado con la seguridad social. Con el progresivo envejecimiento de la población, y la incorporación al mundo laboral de la mujeres (principales cuidadoras de los familiares dependientes), surgió la necesidad de aunar esfuerzos y realizar un marco de coordinación y cooperación para la atención al colectivo de las personas en situación de dependencia desde un tratamiento más integral (Fernández y Ponce de León, 2011: 32), ofreciendo a los servicios sociales mayor capacidad de respuesta ante la creciente demanda.

Los colectivos más vulnerables son las personas con discapacidades, menores de edad, así como el grupo de mayores de 65 años con niveles precarios y crónicos de salud (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011: 70). Respecto a este último colectivo unido al progresivo envejecimiento de la población, las administraciones públicas se vieron abocadas a asumir la responsabilidad de apoyo y colaboración con los cuidadores principales para dar respuesta a la creciente demanda.

Según los datos publicados en el *Libro Blanco de la Dependencia* (IMSERSO, 2004: 27-28) se estima que el progresivo envejecimiento de la población va a suponer que en España, para el año 2016, el 18,5 % de la población tenga más de 65 años, y para el año 2026 se estima que será el 21,6 %; es decir, se irá consolidando el denominado “envejecimiento del envejecimiento” (mayores de 80 años con numerosas necesidades de atención). Si en el año 2006, los mayores de 80 años suponían el 4,6 % sobre la

población en general (y el 27,2 % sobre los mayores de 65 años), en el año 2021 esta cifra será del 6,2 % (y el 31,6 % de los mayores de 65 años).

Respecto a los datos disponibles para la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), sobre discapacidad en España, podemos decir que más del 32 % de las personas con discapacidad son mayores de 65 años, y sobre los menores de esa edad, el porcentaje se sitúa en un 5 % sobre el total. En los datos de este estudio también se puede observar que a medida que van alcanzando los años, pasados los cincuenta, el crecimiento de la dependencia es continuo y notable. Atendiendo al criterio de género, el 58,3 % del total eran mujeres, pero solo en los tramos de edad más baja, invirtiéndose los datos a medida que se va envejeciendo siendo la edad de 45 años el punto de inflexión donde estos datos comienzan a cambiar (IMSERSO, 2004: 30).

La *Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999 (EDDES)*, publicada en el año 2002 fue la base sobre la que se estudió el perfil de los posibles beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Promoción de la Dependencia. Utilizaremos sus datos para observar el perfil sociodemográfico de los mismos. Anteriormente, nos hemos referido a cifras de personas con discapacidad, sin embargo debemos tener en cuenta que las cifras que a continuación se presentan, atienden a aquellas que se tomaron en cuenta para la puesta en marcha de la Ley, además estas se detallarán en función de diferentes grupos de edad. La encuesta fue llevada a cabo por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) con una muestra de 70 500 viviendas, lo que supuso llegar a un total de 218 000 personas en toda España.

Según la encuesta anterior el número total de personas con discapacidad en España era de 3 528 221, lo que suponía el 9 % de la población. Por tramos de edad, la población entre los 6 y los 64 años de edad, suponía el 4,59 % de la población general, un total de 1 405 992 personas (EDDES, 2002: 10). En este tramo de edad, se incluían todas aquellas personas que presentaban dificultad importante para desplazarse fuera del hogar, así como en la realización de las tareas domésticas.

Siguiendo la Tabla 1 (ver Anexo), en el grupo de edad de 65 años y más, había un total de 2 072 652 de personas, lo que representa el 32,21 % de la población total para ese grupo de edad (en la Tabla 1 figura 322,11 al reflejar la tasa por cada 1000 habitantes de 65 años y más). El 70 % de las personas mayores de 65 años con discapacidad reconocida tiene dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (EDDES, 2002: 21). Las regiones que acumulaban el mayor número de personas dependientes mayores de 65 años fueron: Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana; aunque la mayor tasa por mil habitantes se dio en Murcia (EDDES, 2002: 22).

En cuanto al conjunto de los menores de 6 años con discapacidad reconocida su número ascendía a 49 577 menores, lo que supone el 2,24 % de la población con la misma edad (EDDES, 2002: 28). Por Comunidades Autónomas, como se muestra en la Tabla 2 (ver Anexo), las regiones con mayor número de personas con discapacidad en el grupo de población entre 6 y 64 años son: Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.

A través de la exposición de los datos que se muestran en la Tabla 2 (ver Anexo), se vislumbra el perfil sociodemográfico de las personas susceptibles de ser incorporadas al sistema de la dependencia, y en base a estos podríamos deducir que para los dos grupos de edad analizados, las regiones con previsión de mayor número de solicitudes de reconocimiento del grado y nivel de dependencia serían: Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana; frente a regiones como La Rioja y Navarra con un menor número de personas con discapacidad reconocida (EDDES, 2002: 22), y que previsiblemente sus servicios de dependencia no deberían colapsarse.

Si atendemos a los datos recogidos en las Estadísticas del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), publicado el 1 de diciembre de 2011 en Portal Mayores, observamos que las regiones con más solicitudes de dependencia registradas y tramitadas son: Andalucía con el 25,5 %, Cataluña con el 17,6 % y Madrid con el 8 %. Otras comunidades con menor población registran menores tantos por cierto, como por ejemplo, Ceuta y Melilla con un 0,2 %, La Rioja con el 0,9 %, y Navarra con el 1,3 %. En base a lo expuesto, podemos observar la correlación positiva existente entre el número de personas con discapacidad y las que posteriormente han sido beneficiarias del sistema de dependencia, por lo que si este dato se hubiera tenido en cuenta se podrían haber evitado los atrasos en las tramitaciones y gestiones de las solicitudes.

Por otro lado, si ponemos en relación los datos que acabamos de analizar con la escala de valoración facilitada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que aparecen en las Tablas 5 y 6 (ver Anexo), observamos que: en el caso de Cataluña a pesar de ser la región donde se acumula el mayor número de personas con discapacidad reconocida en ambos tramos de edad, desde la entrada en vigor de la ley es una de las Comunidades Autónomas que ha gestionado el mayor número de solicitudes. En la escala de valoración puntúa un 7,5 sobre un total de 12, lo que sitúa a Cataluña en una de las regiones con mejor nivel de implantación y desarrollo de la ley, más aún si tenemos en cuenta que su volumen de población total susceptible de acceder al sistema era el más alto de la media nacional.

Andalucía es también una de las regiones donde se acumula el mayor número de personas con discapacidad, y de nuevo se corresponde con una de las CCAA que registró y tramitó el mayor número de solicitudes de dependencia, concretamente fue

la que mayor número de solicitudes ha gestionado. La puntuación que obtenía esta región en la escala de valoración era de 7 sobre 12, lo que sitúa a Andalucía entre las regiones con mejores niveles de implantación y desarrollo. Esta afirmación se obtuvo al relacionar el número de personas que tenía Andalucía con discapacidad reconocida y las tramitaciones que se llevaron a cabo. Existen otras regiones que puntuaban incluso más alto que Andalucía, pero en ellas el número de personas con discapacidad reconocida era considerablemente inferior, de ahí la valoración positiva que se puede extraer en la región andaluza.

Otra de las comunidades a tener en cuenta es Madrid, cuyo volumen de población de personas con discapacidad también es de los más altos de la media nacional, y el número de solicitudes tramitadas del reconocimiento del grado y nivel de dependencia ha sido del 8 %, también uno de los más altos. A pesar de esta situación, en el caso de Madrid, su puntuación en la escala de valoración fue de 3,5 sobre 12, porque se obtuvo una baja puntuación en los siguientes ítem; *personas beneficiarias sobre el total de la población, solicitudes sobre el total de la población, dictámenes sobre el total de la población, aportación efectiva de la Comunidad Autónoma por habitante y año, nuevas leyes de servicios sociales, innovación y buenas prácticas, información en tiempo real y modelo de seguimiento*. Estos resultados nos permiten ver que la Comunidad de Madrid no tiene un modelo de aplicación integral adecuado a las circunstancias y necesidades del sistema, mientras que las dos regiones anteriormente señaladas muestran una pauta de comportamiento más homogénea.

Con un supuesto parecido a la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana es la cuarta región con mayor número de personas con discapacidad, las solicitudes tramitadas de dependencia suponen el 6,7 % del total, y sin embargo su puntuación en la escala de valoración es de 1,5 frente a 12. Por otro lado, si atendemos al criterio de menor número de personas con discapacidad como ocurre con Ceuta, Melilla, La Rioja, Navarra, Cantabria, Baleares o Aragón, observamos puntuaciones dispares; por un lado tenemos que Ceuta y Melilla obtienen un 4, Baleares un 4,5, La Rioja un 9, Navarra un 7, Cantabria 7 y Aragón un 9.

En base a los párrafos anteriores, se podría profundizar aún más en el análisis de los datos teniendo en cuenta los siguientes indicadores: región por el porcentaje de solicitudes sobre el total de la población, el porcentaje de dictámenes sobre el total de la población, el porcentaje sobre el total de solicitudes y el porcentaje de personas con derecho pero sin prestación o servicio (conocido como el limbo de la dependencia). Tomaremos como referencia, en primer lugar, aquellas regiones que presentaban las tasas más altas de personas con discapacidad y que serían susceptibles de acceder al sistema de atención a la dependencia sin hacer distinción en grupos de edades, las regiones que se pueden enmarcar en este criterio son Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana.

Si analizamos estas regiones en base a los indicadores anteriores (ver Tabla 3 en el Anexo), observamos que: Cataluña ha sido una de las regiones que mayor porcentaje de solicitudes ha tramitado, un 3,66 (media 3,4) que ha resuelto dictámenes en un 3,44 % (media 3,2 %), que tiene un 94 % de dictámenes sobre el total de las solicitudes (media 93,5 %) y presenta un 34,7 % de personas con derecho reconocido pero sin prestación o servicio otorgado (media 29,6 %). Se desconoce la razón de este último dato pero puede ser debido a la falta de dotación presupuestaria, u otras razones que también podrían ser objeto de análisis. Las puntuaciones en los indicadores de Andalucía, sus puntuaciones en los indicadores también están en general por encima de la media; la relación entre solicitudes sobre la población supone un 4,94 % (media 3,4 %), el porcentaje de dictámenes sobre la población un 4,54 % (media 3,2 %), sobre el porcentaje de dictámenes sobre las solicitudes un 92 % (media 93,5 %) aquí baja con respecto a la media, pero la diferencia es mínima. Finalmente, está por debajo de la media en el porcentaje de personas con derecho pero sin prestación efectiva un 28,8 % frente a una media de 29,6 %, lo que resulta ser un dato relativamente positivo. Ahora nos centraremos en el caso de Castilla y León, cuyos porcentajes también son positivos y por encima de la media, 3,63 % (media 3,4 %) de solicitudes sobre la población, 3,46 % (media 3,2 %) de dictámenes sobre el total de la población, sobre el porcentaje de dictámenes en función de las solicitudes esta región no ha aportado datos, y presentan un 11,9 % (media 29,6%) de personas con derecho reconocido pero sin prestación. Cabe destacar que este es uno de los datos más bajos de todo el panorama nacional, sólo por encima de Ceuta y Melilla.

A continuación se analiza el caso de Madrid, con una de las tasas mayores de personas con discapacidad reconocida. En este caso sus puntuaciones en los indicadores objeto de estudio son los siguientes, un 2,2 % (media 3,4 %) de solicitudes sobre el total de la población, un 2,14 % (media 3,2 %) de dictámenes sobre la población, un 97,4 % (media 93,5 %) de dictámenes sobre las solicitudes y un 17,5 % (29,6 %) de personas con derecho reconocido pero sin asignación de recurso social.

Finalmente se analizará la Comunidad Valenciana, que también presentaba las mayores tasas de personas con discapacidad y obtiene los siguientes porcentajes un 2,13 % (media 3,4 %) de solicitudes sobre la población, un 2,11 % (media 3,2 %) de dictámenes sobre la población, un 99 % (media 93,5 %) de dictámenes sobre las solicitudes y un 42,1 % (29,6 %) de personas con derecho reconocido pero sin asignación de prestación o recurso.

Podemos decir que en el caso de Cataluña existe una coherencia entre el volumen de personas con discapacidad existentes previo a la entrada en vigor de la ley, con el hecho de que está por encima de la media en los indicadores analizados y cuya valoración general es muy positiva. En definitiva, las características del colectivo de personas en situación de dependencia sí se tuvieron en cuenta en la implantación de la norma en esta región. En el caso de Andalucía mantiene una misma tendencia que

Cataluña, es decir, se trataba de una región con mucho volumen de personas con discapacidad, y que posteriormente ha sido una región que ha gestionado por encima de la media nacional, que se encuentra por debajo de la media en el porcentaje de personas con derecho reconocido pero sin prestación o servicio, y que la valoración general que se le otorga en el conjunto es positiva. Por lo tanto podemos hablar de planificación y prevención entre las estrategias de gestión de la ley. La región de Castilla y León también tiene una evolución positiva entre el número de personas con discapacidad y los porcentajes por encima de la media en gestión, además se trata de una región que además de tener el volumen más bajo de personas a las que se les ha reconocido el derecho pero que no disfruta de servicio o prestación, también es una de las regiones con mejor valoración general en su gestión. La Comunidad de Madrid obtiene unas puntuaciones que están por debajo de la media nacional salvo en el número de dictámenes sobre el total de solicitudes, que es muy alto, puede ser debido a que, puesto que tienen muy bajos los dos indicadores anteriores, es más fácil que se alcancen mayores cotas en el número de dictámenes otorgados, también cuenta con una media baja en el porcentaje de personas a las que aún no les ha otorgado un servicio o prestación.

Esta tendencia de puntuaciones tan diferentes en los indicadores y la valoración general tan negativa que obtiene de la escala nos permiten observar una falta de planificación en sus estrategias de implantación de la ley. En el caso de la Comunidad Valenciana sigue un mismo patrón que Madrid, en puntuaciones por debajo de la media, pero la particularidad de Valencia es que obtiene la puntuación más elevada en toda España de personas con derecho reconocido y sin asignación de recurso o prestación. Esta situación y la valoración general tan negativa que obtiene en la escala de valoración, nos permiten observar la falta de previsión, el desconocimiento de las necesidades en la implantación de la ley, y la falta de responsabilidad en la atención al colectivo de personas en situación de dependencia ya que los datos son claros; casi la mitad de las personas que tiene reconocido el derecho, no están pudiendo acceder a recursos y prestaciones sociales que solventen su grave vulnerabilidad sociosanitaria.

Como conclusión a estos indicadores, se ha de observar que es importante tener en cuenta el colectivo al que se dirige una determinada política porque puede influir, y de hecho influye decisivamente, tanto en la implantación como en su desarrollo.

Con los datos expuestos en la Tabla 3 (ver Anexo) hasta ahora se puede alegar que las características del colectivo de personas en situación de dependencia están siendo decisivas en el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia, pero con algunos matices regionales, como se ha podido apreciar. Allí donde se concentraba el mayor número de personas con discapacidad (que son el claro objetivo del sistema de atención a la dependencia, por ser la que requieren ayuda para la realización de una o varias actividades de la vida diaria) es donde también se han gestionado el mayor número

de solicitudes de reconocimiento del derecho, pero eso no significa que en el conjunto de la gestión del reconocimiento del grado y nivel de dependencia hayan obtenido valoraciones positivas en todas las regiones. Así pues, en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana (regiones con los volúmenes más altos de personas con discapacidad) también han sido las que han gestionado mayor número de solicitudes.

La diferencia radica en que el tratamiento global de todo el proceso es diferente si la evolución histórica de las puntuaciones en la escala de valoración, desde el año 2008 hasta junio de 2011 (ver Tabla 10 Anexo), Cataluña mantiene una evolución positiva y creciente, Andalucía evoluciona negativamente decreciendo, y Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid mantienen una tendencia muy baja con mínimas variaciones. Cataluña puntúa alto en desarrollo e implantación, sin embargo Madrid y Comunidad Valencia puntúan muy bajo en este ítem.

Por lo tanto, podemos concluir que a pesar de la correlación positiva entre el posible número de personas en situación de dependencia y las solicitudes realizadas, el proceso de desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia está influido por otras variables que pueden originar variaciones regionales en cuanto a su implantación y desarrollo.

1.2. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

La coordinación y cooperación de las instituciones responsables es otro de los elementos que influyen en la implantación de la Ley de Dependencia. A continuación se estudiarán los datos de las CCAA cuyo interés radica fundamentalmente en el análisis completo que nos permitirá obtener unos resultados más realistas de la situación, dejando de lado la posible parcialidad del panorama general.

Así pues, si ponemos en relación el partido político de cada una de las regiones que estamos estudiando con el partido político que estaba en el gobierno central (en este caso el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya que tomamos como referencia el año 2011), obtenemos los resultados que aparecen en la Tabla 4 (ver Anexo). Podemos observar que hay siete Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha, por lo tanto se presupone afinidad política con el gobierno central. Por otro lado, aparecen ocho regiones gobernadas por el Partido Popular (PP): Castilla y León, Valencia, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla. Finalmente, cuatro Comunidades Autónomas están gobernadas por partidos regionalistas o nacionalistas: Cataluña, Canarias, Cantabria y Navarra. Una vez descrito el mapa político por regiones en relación con el partido político de la administración central, pasamos a realizar una comparación entre la afinidad política con el gobierno central y las puntuaciones que obtienen cada uno de las CCAA en implantación de la ley.

Respecto a la puntuación que aparece en la Tabla 4 (ver Anexo), se debe señalar que se lleva a cabo en base a la escala de valoración elaborada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, anteriormente referenciada y que tiene en cuenta unos ítems concretos de valoración expuestos en la Tabla 5 (ver Anexo).

Si observamos los datos del Anexo (ver Tabla 6) y tomando como referencia la media de implantación y desarrollo de la ley, esta se sitúa en torno al 5,9 (esta media se obtiene de la suma de todas y cada una de las regiones que son objeto de estudio). La máxima puntuación que se podría obtener es de 12 puntos y ninguna región alcanza dicha puntuación, por lo que podemos concluir que ninguna región ha implementado y desarrollado la ley con altas dosis de calidad. Sin embargo existen regiones que están en mínimos muy importantes en cuanto a lo que estamos midiendo, recordamos que nos estamos refiriendo siempre a la escala de valoración que hemos explicitado.

A la vista de los datos que nos ofrece la Tabla 7 (ver Anexo), podemos expresar que la media de las puntuaciones de todas aquellas Comunidades Autónomas que son gobernadas por partidos políticos afines al partido que se encuentra en el gobierno central, es superior a la media nacional, es decir, se sitúa en 6,33 frente al 5,9 (media nacional). Además se observa que en este grupo se incluyen aquellas regiones con puntuaciones más altas como el País Vasco y Aragón, seguida de Andalucía, de igual forma se puede alegar que en ningún caso son las puntuaciones más bajas de todo el territorio nacional.

Por el contrario aquellas regiones que son gobernadas por el PP, puntúan según los datos recogidos en la Tabla 8 (ver Anexo). La conclusión de los datos nos presenta que aquellas CCAA cuyos gobiernos están dirigidos por partidos políticos que no son afines al partido político de la administración central la media es inferior en la escala de valoración, concretamente de 5,25 frente al 5,9 de la media nacional. Estarían por debajo de lo considerado como mínimamente aceptable en desarrollo e implantación, situándose también por debajo de la media real (6 puntos).

En este grupo de regiones, se observa la paradoja de encontrar regiones contrapuestas ideológicamente que puntúan muy alto como Castilla y León y La Rioja, y CCAA que puntúan muy bajo como es el caso de Valencia. También se incluye la Comunidad de Madrid, que a la vista de los datos suspende en implantación y desarrollo con una nota relativamente baja. Esto tiene un especial protagonismo si tenemos en cuenta que el gobierno del PP ha estado presente en el gobierno autonómico desde la entrada en vigor de la ley con mayoría absoluta lo que le hubiera permitido integrar todas aquellas modificaciones para mejorar su situación, todo ello sin los posibles obstáculos y objeciones de la oposición. Además, esta región ha recibido muchas quejas de su implantación en los medios de comunicación, y sin embargo se ha convertido en un “azote” para el gobierno central en cuanto a la implantación. Las medidas que haya podido

tomar para minimizar esas incidencias han sido insuficientes a la vista de la puntuación obtenida. En el resto de Comunidades Autónomas, que no son gobernadas ni por el PP ni por el PSOE, los resultados son relativamente positivos (ver Tabla 9 en Anexo), tres de estas cuatro regiones puntúan por encima de la media nacional, no son puntuaciones elevadas pero se mantienen constantes. Sólo hay una región, concretamente las Islas Canarias, que puntúan por debajo (en concreto con 0,5) lo que la sitúa en la nota más baja de todas las regiones españolas. Si aplicamos la media, estaríamos en torno a un 5,5 frente a un 5,9 (media nacional).

Por otro lado, si relacionamos aquellas regiones que son gobernadas por el PP, así como todas aquellas cuyos partidos en el gobierno no son del PSOE, obtenemos una puntuación más baja (5,33) de la media nacional que hemos establecido en 5,9. Por lo tanto, aunque no hay una diferencia estadísticamente significativa, sí podríamos decir que todas aquellas regiones cuyos equipos de gobierno no pertenecen a la misma ideología política que el partido político del gobierno central, puntúan por debajo de la media nacional en desarrollo e implantación de la Ley de la Dependencia. Asimismo, a través de los datos expuestos, se observa que aquellas regiones cuyos gobiernos coinciden en abanico político con el gobierno central, puntúan por encima de la media y por lo tanto tienen mejores resultados en implantación y desarrollo de ley.

Poniendo en relación los datos analizados con la hipótesis de este trabajo se podría concluir que, efectivamente, todas aquellas CCAA que coinciden en el color político del gobierno central han facilitado los procesos de coordinación y cooperación en la implantación de la ley. Por el contrario, el resto de CCAA que no coinciden con la ideología política podrían haber obstaculizado y frenado el desarrollo de la ley.

No podemos dejar de señalar que las diferencias obtenidas de los datos son mínimas y que en el caso de Canarias al obtener una puntuación tan baja afecta al resto de puntuaciones de su grupo de regiones, por lo tanto, no debemos hacer conclusiones generalista o cerradas, sin atender a las explicaciones particulares de cada región. De esta forma, observamos que aun cuando en los equipos de gobierno de algunas regiones como Castilla y León y La Rioja, cuyo color político no coincide con el del gobierno central, sus puntuaciones en desarrollo y aplicación de la ley son muy elevadas. También existen por el contrario regiones como Extremadura o Asturias, que eran del mismo signo político y sus puntuaciones estaban por debajo de la media.

Asimismo, los indicadores utilizados han sido extraídos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que a su vez han utilizado como fuente el SAAD del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por lo que en estudios posteriores un análisis de las características propias de cada Comunidad Autónoma, nos permitiría obtener conclusiones más clarificadoras de las causas que han generado esas dificultades. Viendo que tratan de abarcar todos los aspectos de gestión y reconocimiento del de-

recho, y puesto que suponen el acuerdo de todas las regiones, entendemos que podrá ser positivo como medida de mejora de la gestión, más aún cuando tras las elecciones autonómicas de mayo del 2011 el PP obtuvo gran parte de las CCAA gobernadas por el PSOE. Esto puede ser analizado como un paso más en los acuerdos con el gobierno central para el buen desarrollo e implantación y el deseo de modificar el tratamiento que hasta ahora se le ha dado a la ley. Debe apuntarse que sería interesante realizar un estudio longitudinal transcurridos dos o tres años de permanencia de los gobiernos autonómicos tras el vuelco de las elecciones pasadas, comparando los resultados obtenidos de la presente investigación, con respecto a los resultados que podremos obtener más adelante, lo que nos permitiría saber hasta qué punto influye el color político de los gobiernos autonómicos con respecto al gobierno central en la implantación y desarrollo de políticas públicas.

3. DIFERENTE CAPACIDAD Y VOLUNTAD DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA: CENTRAL, AUTONÓMICA Y LOCAL

Por último, nos referiremos sobre la implantación de la ley en la capacidad de los diferentes niveles de administración en España: central, autonómico y local y el papel tan importante que juegan en la creación o no de estructuras paralelas para el desarrollo de la norma, así como la mayor o menor aportación económica en la ejecución por parte de las regiones, por lo que supone un componente de voluntariedad en la aplicación de ley. No podemos dejar de lado el estudio de los recursos económicos necesarios para su funcionamiento y desarrollo; es importante su análisis pues nos facilitará observar las aportaciones que cada región realiza a la implantación de la norma, y nos permite vislumbrar la importancia relativa, que para cada región tiene la atención a las personas en situación de dependencia, así como la primacía que dan a la mejora de las aportaciones que hace la administración central, con el objetivo de dar un buen servicio y de calidad a los beneficiarios.

Así pues, teniendo en cuenta el Informe del Gobierno para la evaluación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011: 199), podemos observar la financiación del coste neto para el año 2010 tanto por parte de la Administración General del Estado (AGE), como de cada una de las CCAA. A través de los datos expuestos se describen tres tipos de grupos según la aportación que realizan:

1. Grupo de regiones en las que la aportación que realizan es superior a la que realiza la Administración General del Estado, datos recogidos en la Tabla 11 (ver Anexo).
2. Grupo de regiones en las que la aportación que realizan es igual a la aportación de la Administración General del Estado, datos recogidos en la Tabla 12 (ver Anexo).
3. Grupo de regiones en las que la aportación que realizan es inferior a la aportación que realiza la Administración General del Estado datos recogidos en la Tabla 13 (ver Anexo).

A la vista de lo que los datos nos arrojan, observamos que aquellas regiones, en concreto tres, que realizan mayores aportaciones (casi el doble en el País Vasco), son concretamente aquellas regiones que más altas puntuaciones reciben en la escala de valoración presentada por Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El País Vasco con un 9,5 de puntuación, La Rioja con un 9 y Andalucía con un 7, nos indica que la aportación que realiza la administración central es complementada y mejorada, de forma muy importante, por las aportaciones territoriales para mejorar la calidad y desarrollo de la ley, y por tanto el componente de voluntariedad está presente para favorecer dicha calidad y desarrollo.

El segundo grupo de regiones analizadas, son aquellas cuya aportación es paritaria a la aportación que realiza la Administración General del Estado, es decir, un 50 %, siendo las regiones que se encuentran en esta situación Cataluña y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este caso, Cataluña tiene una puntuación positiva es decir de 7, en la escala de valoración, mientras que Ceuta y Melilla suspenden, en valoración.

Por último, tenemos el grupo de aquellas regiones cuya aportación es inferior a la que hace la AGE, se trata del grupo más numeroso, en concreto se encuentran en esta situación trece regiones, y es aquí donde se enmarcan también la regiones cuyas aportaciones son las más bajas, como es el caso de Canarias donde su aportación es del 10 %, frente al 90 % de la AGE. Dentro de este tercer grupo podemos observar tres subgrupos:

- Aquellas regiones cuyas aportaciones, a pesar de ser inferiores, son relativamente equiparables como Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia o Castilla y León. En este grupo se combina el esfuerzo por complementar las aportaciones de la AGE para la financiación de la norma, con las puntuaciones obtenidas en la escala de valoración y que prácticamente todas salvo Baleares y Murcia, que puntúan relativamente bajas, el resto lo hacen muy por encima de la media. En definitiva, podríamos decir que se trata de Comunidades Autónomas, cuyo interés, y se observa en las aportaciones que realizan, es el de proveer a los ciudadanos de un servicio de cierta calidad.
- Regiones cuyas diferencias de aportaciones con respecto a la AGE son mayores y significativas, como Extremadura, Cantabria o Asturias. En estas regiones, las aportaciones están alejadas del grupo anterior pero no llegan a ser tan bajas como en el grupo que le sigue; las aportaciones están en torno a un 40 % para la comunidad autónoma y un 60 % para el estado. Son regiones que por lo general puntúan bajo en la escala de valoración, así, tenemos a Extremadura y Asturias con valoraciones que no llegan a la media, y Cantabria que la supera. Podríamos decir que se trata de regiones que también hacen un esfuerzo por situarse en los puestos de cierta relevancia en cuanto a aportaciones.

- Regiones cuyas diferencias en las aportaciones que hacen con respecto a la AGE, son muy significativas como son Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. En este último grupo se encuentran las aportaciones regionales más bajas en comparación con la aportación que se hace desde la Administración Central. Además coincide también en que son regiones cuyas puntuaciones en la escala de valoración, también son muy bajas; así encontramos a Galicia que puntúa 5, un 3,5 para Madrid, Valencia 1,5 y Canarias, a las que ya nos hemos referido y que puntúa un 0,5. La reflexión que podemos hacer al respecto, es que el interés o la importancia de cada una de estas regiones hacia el colectivo de personas en situación de dependencia es muy bajo, ya que se alejan en gran medida de las aportaciones mínimas que deben hacer, en función de las características de su demanda para prestar un servicio de calidad. Nuevamente, observamos en estas regiones la desidia pública en la prestación del servicio al ciudadano.

Se puede observar que el índice de aportación económica a la implantación y desarrollo de la norma, nos clarifica el interés y voluntariedad de cada una de las regiones en favorecer su consolidación y ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos en situación de dependencia. Asimismo, nos ofrece un cierto paralelismo con la escala de valoración de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, observando que existe una correlación positiva, es decir, a mayor grado de aportación económica mayor valoración positiva en implantación y desarrollo de la ley.

Además de las aportaciones económicas para el desarrollo e implantación de la ley, debe analizarse la existencia o no de estructuras administrativas creadas *ad hoc* para la atención al colectivo de personas en situación de dependencia, o si por el contrario, la aplicación de la ley se ha integrado en el organigrama ya existente de cada una de las administraciones autonómicas (este análisis se ha realizado en base a la estructura orgánica de las administraciones de cada una de las regiones objeto de estudio). Se pretende ver en qué medida el crear o no estas estructuras paralelas han influido en el desarrollo de la misma. La especial situación de Ceuta y Melilla hace que sus servicios estén directamente relacionados con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, hecho que no ocurre con el resto de regiones. Así pues, a través del análisis llevado a cabo a través de la observación de las estructuras orgánicas de las diferentes CCAA, debe señalarse que todos los servicios de atención a la dependencia se encuentran integrados en las Consejerías de servicios sociales, política social, familia, servicios de atención a la ciudadanía, según la denominación que cada uno de ellos haya querido otorgar a dicha consejería. Podemos distinguir dos grupos:

1. Aquellas regiones que integran sus servicios de atención a la dependencia en las estructuras ya creadas, por lo tanto aprovechan los recursos existentes: Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Navarra, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

2. Aquellas regiones que han creado otras estructuras diferentes a las ya existentes y que suman más elementos a su organigrama, y en definitiva pueden suponer un mayor coste en términos generales: Madrid, Asturias, Aragón, Valencia, Baleares, Andalucía, Murcia, Canarias y Extremadura.

A la vista de los datos, observamos que en el primer grupo se aglutinan las regiones que han aprovechado los recursos existentes y han integrado la atención al colectivo de personas en situación de dependencia dentro de la estructura de los servicios sociales, esto ha favorecido la aplicación de la ley suponiendo un ahorro económico. Además, salvo el caso de Galicia que puntúa en la escala de valoración un 5, el resto de regiones son las que mayores puntuaciones obtienen en la escala de valoración a la que venimos haciendo referencia.

Por otro lado, en el segundo grupo nos encontramos con todas aquellas CCAA que han creado estructuras paralelas o diferentes a las ya existentes en materia de atención social, suponiendo que se han generado mayores costes, y mayor dificultad en el desarrollo de la norma. En este grupo salvo Aragón y Andalucía, que puntúan alto en la escala de valoración, el resto de regiones son las que acumulan las puntuaciones más bajas en cuanto al grado de aplicabilidad e implantación.

Como conclusión a este apartado, podemos decir que existe una correlación positiva entre el aprovechamiento de los recursos existentes en materia de asistencia social o servicios sociales, y el mayor grado de implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia. Es decir, todas aquellas regiones que han creado estructuras paralelas, afines al sistema público de servicios sociales, pero que no se han servido de estos para apoyarse en la prestación de servicios dirigidos a la dependencia, se han demorado en la puesta en marcha, en los procesos, y en definitiva en poder dar respuesta eficaz al colectivo de personas en situación de dependencia.

La conclusión definitiva confirma el hecho de que en todas aquellas regiones en las que se han generado estructuras administrativas paralelas, han visto como el desarrollo de la ley ha tenido muchas más dificultades que el resto de regiones que han reforzado y utilizado las estructuras existentes. De igual modo, se observa que todas aquellas CCAA que han realizado mayores aportaciones económicas para la financiación del sistema, su funcionamiento y valoración general han sido más positivas.

4. CONCLUSIONES

Analizando los datos expuestos en los puntos anteriores se podría llegar a las siguientes conclusiones finales:

- Tanto las características del colectivo de personas en situación de dependencia, como la coordinación y cooperación en la implantación de las políticas públicas, y la diferente capacidad y voluntad de la Administración Central, Autonómica y Local, importan en el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia y por tanto en las diferencias entre CCAA, aunque no operan de forma aislada. Por el contrario, todas influyen en el proceso y suman en el diferente desarrollo de la misma.
- Por otro lado, las características del colectivo de personas en situación de dependencia objeto de intervención, sí influyen en el proceso de puesta en marcha y aplicación de la ley, siendo la relación causal muy débil. Podríamos así referirnos a una cierta correlación positiva entre la existencia de unas determinadas características del colectivo y la efectividad en la aplicación de la ley, pero no podemos hablar de relación causal efectiva. Por tanto, concluimos que esta variable tiene cierta influencia pero no es determinante.
- Respecto a la coordinación y cooperación de los gobiernos de cada una de las regiones que componen el panorama español, con respecto a la ideología del partido del gobierno central, a la vista de los datos obtenidos, observamos que efectivamente, todas aquellas CCAA que coinciden en el color político del gobierno central han facilitado los procesos, frente a aquellas que no coinciden con la ideología política y por tanto, podrían haber obstaculizado y frenado el desarrollo de la norma. Así pues, podemos hablar de una correlación positiva con ciertas limitaciones si atendemos a las diferencias particulares de cada región.
- En referencia a la capacidad y voluntad de la Administración Central, Autonómica y Local para la puesta en marcha y aplicabilidad de la ley, se destacan dos apartados relevantes para analizar, por un lado las aportaciones económicas de las regiones al desarrollo de la ley, así como la creación o no de estructuras administrativas paralelas a las ya existentes para la implantación de la misma. Con los datos ofrecidos anteriormente se podría concluir que a mayor grado de aportación económica, por parte de las CCAA y por tanto de voluntad de hacer las cosas bien en base a criterios de calidad, eficiencia y eficacia, mayor valoración positiva en implantación y desarrollo de la ley. Por otro lado, también existe una correlación positiva entre el aprovechamiento de los recursos existentes en materia de asistencia social o servicios sociales, y el mayor grado de implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia. Por lo tanto, las dos partes de este último aspecto analizado son decisivas para garantizar la implantación satisfactoria de la ley. En esta conclusión creo que también es importante hacer referencia a la voluntad por

parte de los gobiernos autonómicos de dotar a sus sistemas de servicios sociales de regulaciones normativas adecuadas y ajustadas a la realidad. Ante este hecho observamos que existen regiones en las que se mantiene la misma Ley de Servicios Sociales como en Extremadura y Canarias, publicadas en el año 1987; el resto de autonomías han publicado y actualizado sus normas, son las denominadas leyes de segunda generación. Por otro lado tenemos a los “punteros” en servicios sociales como La Rioja y el País Vasco que ya han publicado leyes de tercera generación. Esta situación demuestra la voluntad política de cada una de las regiones españolas ante el Sistema Público de Servicios Sociales, que requiere de actualizaciones continuas ante la creciente transformación social, y nos permite vislumbrar la importancia, que desde los poderes políticos se tiene de la atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Haciendo referencia a la escala de valoración que se ha utilizado en esta investigación, tras siete años de entrada en vigor de la ley, ninguna de las regiones obtiene la máxima puntuación. Observamos que de una puntuación máxima de 12 puntos, la mayor puntuación que se ha conseguido ha sido de 9,5. Esto nos permite señalar que, a pesar de que existen regiones que han tratado de ejecutar la ley conforme a criterios de calidad, eficiencia y eficacia aún existen aspectos que deben ser trabajados.

Concluimos que las regiones que mejor han implantado la norma han sido País Vasco y La Rioja, pues alcanzan una mayor puntuación en la escala de valoración, y realizan mayores aportaciones económicas al desarrollo de la norma, por encima de la Administración General del Estado, y porque aprovechan sus recursos existentes e incorporan el desarrollo de la ley a sus estructuras. Podemos decir que estas dos regiones son las que tienen un tratamiento global e integral en la aplicación, y su valoración es positiva en prácticamente todos los ítems analizados, además se observa homogeneidad en sus procesos. Por otro lado, están aquellas regiones cuyo desarrollo no se encuentra entre los más efectivos, así tenemos a Canarias, Madrid o Comunidad Valenciana las cuales obtienen peor puntuación en la escala de valoración, y son además las regiones que menos aportan a la financiación con respecto a la aportación de la Administración General del Estado, también se les suma que han creado estructuras paralelas a las ya existentes. Asimismo, a pesar de que existen regiones no afines políticamente al del gobierno central, sus puntuaciones en la escala de valoración son positivas, como el caso de Castilla y León o La Rioja, y sin embargo regiones que coinciden en ideología política con el Gobierno, sus puntuaciones son más bajas, como es el caso de Extremadura, Baleares o Asturias.

A la vista de estas conclusiones, es importante señalar que la correlación positiva observada en el desarrollo de las hipótesis no es muy determinante, lo que nos indica que estas no operan de forma aislada, sino que todas influyen en el proceso, como pueden estar influyendo otros factores que no han sido objeto en esta investigación. Las varia-

bles que hemos estudiado han sido seleccionadas a través del análisis de la literatura científica internacional en la implantación de políticas públicas, ejemplos de Canadá (Denny-Brown, N., y Debra, J., 2009: 1-10), Estados Unidos (Dahill-Brown, S; Lavery, L., 2009: 1-24) o Suiza (Battaglini, M., y Giraud, O., 2003: 1-20) nos han permitido acotar nuestra labor de investigación, pero también en la literatura social española hemos observado la influencia de estas variables, así Garcés (2008), también afirma que el perfil de las personas objeto de la ley ha influido decisivamente en el desarrollo de la misma, al igual que la organización de cada una de las regiones en la implantación.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Battaglini, M., y Giraud, O. (2003). *Policy Styles and the Swiss Executive Federalism: Comparing Diverging Styles of Cantonal Implementation of the Federal Law on Unemployment*. Lausane: University Lausann.
- Dahill-Brown, S., y Lavery, L. (2009). *Implementing Federal Policy: Confronting State Capacity and Will*. Wisconsin: University of Wisconsin-Madison.
- Denny-Brown, N., y Debra, J. (2009). *Early Implementation Experiences of State MFP Program. The national evaluation of the money follows the persons (MFP) demonstration grant program*. Mathematic Policy Research, Inc.
- Fernández, T., y Ponce de León, L. (2011). *Trabajo Social con Familias*. Madrid: Ediciones Académicas.
- Garcés, G. (1996). *Sistema político y administrativo de los servicios sociales. Políticas de Bienestar Social*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Garcés, A. (2008). "Desarrollo y aplicación en el Estado Autonómico del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)". *El estado de las autonomías en 2008*. Madrid: Temas Monográficos.
- Gómez, S. (2012). Aproximación a la implementación de políticas públicas a través la Ley de Dependencia: experiencias de otros países y valoración de la situación en España. *Trabajo Social Hoy*, 68, 7-30.
- IMSERSO (2004) Libro Blanco: Atención a las Personas en situación de Dependencia en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- IMSERSO (2012). *Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia*. http://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_dependencia/index.htm. Fecha de consulta enero 2012.
- INE (2002). *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud 1999, Avance de resultados, datos básicos (EDDES)*. <http://www.ine.es/prodyser/pubweb/discapa/disctodo.pdf> Fecha de consulta enero 2012.
- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011). *Informe del Gobierno para la evaluación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia*. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

6. ANEXO

Tabla 1. Personas mayores de 65 años con discapacidad por Comunidad Autónoma			
CCAA	Población total de 65 años y más	Personas con discapacidad	Tasa por 1000 habitantes de 65 años y más
Andalucía	985.946	388.837	394,38
Aragón	240.635	64.548	268,24
Asturias	212.760	63.776	299,75
Baleares	114.364	29.684	259,55
Canarias	190.607	51.891	272,24
Cantabria	94.342	29.748	315,32
Castilla y León	512.714	191.087	372,7
Castilla-La Mancha	317.647	107.881	339,62
Cataluña	1.033.387	339.553	328,58
Valencia	625.404	187.954	300,53
Extremadura	188.044	67.189	357,3
Galicia	520.028	168.620	324,25
Madrid	751.468	197.804	263,22
Murcia	154.500	62.558	404,9
Navarra	90.789	26.124	287,75
País Vasco	337.296	80.693	239,24
La Rioja	48.441	8.877	183,25
Ceuta/Melilla	16.152	5.831	360,99
TOTAL	6.434.524	2.072.652	322,11
Fuente: Revisión de las proyecciones de población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999, INE.			

Tabla 2. **Personas de 6 a 64 años con discapacidad por Comunidad Autónoma**

CCAA	Personas con discapacidad de 6 a 64 años	Personas con discapacidad de 65 años y más	Total
Andalucía	319.994	388.837	708.831
Aragón	31.499	64.548	96.047
Asturias	37.227	63.776	101.003
Baleares	27.265	29.684	56.949
Canarias	54.394	51.891	106.285
Cantabria	1.842	29.748	48.150
Castilla y León	84.213	191.087	275.300
Castilla-La Mancha	57.015	107.881	164.896
Cataluña	224.960	339.553	564.513
Valencia	124.921	187.954	312.875
Extremadura	35.102	67.189	102.291
Galicia	103.570	168.620	272.190
Madrid	149.996	197.804	347.800
Murcia	48.701	62.558	111.259
Navarra	14.251	26.124	40.375
País Vasco	62.908	80.693	143.601
La Rioja	5.226	8.877	14.103
Ceuta/Melilla	6.347	5.831	12.178
TOTAL	1.405.991	2.072.655	3.478.646
Fuente: Revisión de las proyecciones de población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999, INE.			

Tabla 3. Solicitudes y dictámenes sobre el total de la población y personas con derecho reconocido pero sin asignación de recursos ni prestación por regiones				
CCAA	% Solicitudes sobre población	% Dictámenes sobre población	% Dictámenes sobre solicitudes	% Con derecho pero sin prestación o servicio
Andalucía	4,94	4,54	92	28,8
Aragón	3,67	3,46	94,2	33,3
Asturias	3,28	2,8	85,4	30,6
Baleares	2,2	2,01	91,2	38,7
Canarias	1,78	1,44	81	57,9
Cantabria	4,1	4,09	99,6	14,4
Castilla y León	3,63	3,46	No hay datos	11,9
Castilla-La Mancha	4,34	4,06	93,5	30
Cataluña	3,66	3,44	94	34,7
Valencia	2,13	2,11	99	42,1
Extremadura	4,03	3,59	89,1	33,3
Galicia	3,16	2,8	88,8	45,4
Madrid	2,2	2,14	97,4	17,5
Murcia	3,47	3,38	97,2	31
Navarra	2,84	2,75	97	24,8
País Vasco	3,78	3,62	95,8	15,4
La Rioja	4,32	4,31	99,8	15,3
Ceuta/Melilla	2,39	2,26	94,5	9,1
MEDIA	3,4	3,2	93,5	29,6
Fuente: Elaboración propia en base a los dastos del SAAD, Diciembre 2011.				

Tabla 4. **Partidos políticos en el gobierno por regiones y valoración**

CCAA	PP	PSOE	OTROS PARTIDOS	Puntuación (Implantación y Desarrollo 2011)	AFINIDAD POLÍTICA
Andalucía		X			SI
Aragón		X			SI
Asturias		X			SI
Baleares		X			SI
Canarias			Coalición Canarias		NO
Cantabria			Partido Regionalista de Cantabria		NO
Castilla y León	X				NO
Castilla-La Mancha		X			SI
Cataluña			Convergencia y Unión		NO
Valencia	X				NO
Extremadura		X			SI
Galicia	X				NO
Madrid	X				NO
Murcia	X				NO
Navarra			Unión del Pueblo Navarro		NO
País Vasco		X			SI
La Rioja	X				NO
Ceuta	X				NO
Melilla	X				NO

Fuente: Elaboración propia, referida a los gobiernos autonómicos antes de las elecciones de mayo de 2011.

Tabla 5. Escala de valoración de la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia	
1	Personas beneficiarias sobre el total de la población.
2	Solicitudes sobre el total de la población.
3	Dictámenes sobre el total de la población.
4	Personas con derecho, pendientes de prestación o servicio.
5	Equilibrio prestaciones/servicios.
6	Integración efectiva en la Red Local de Servicios Sociales.
7	Porcentaje de dictámenes sobre la población.
8	Aportación efectiva de las CCAA. Por habitante y año.
9	Nuevas leyes de Servicios Sociales.
10	Innovación y buenas prácticas.
11	Información en tiempo real.
12	Modelo de seguimiento.
Fuente: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.	

Tabla 6. Escala de valoración de la implantación y desarrollo de la ley													
CCAA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Andalucía	1	1	1	0,5	0	1	0,5	1	0	1	0	0	7
Aragón	1	1	1	1	0	1	0,5	1	1	1	0,5	0	9
Asturias	0,5	0,5	0	1	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	3
Baleares	0	0	0	0,5	0	1	0,5	0	1	1	0,5	0	4,5
Canarias	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5
Cantabria	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	7
Castilla y León	1	1	1	1	0	1	0,5	1	1	1	1	0	9,5
Castilla-La Mancha	1	1	1	1	0,5	1	0,5	1	1	1	0	0,5	9,5
Cataluña	1	1	1	0,5	0	1	1	1	1	0	0	0	7,5
Valencia	0	0	0	0,5	0	0	1	0	0	0	0	0	1,5
Extremadura	1	1	1	0,5	0	0	0,5	1	0	0	0	0	5
Galicia	0	0,5	0	0,5	0	1	0	0,5	1	1	0,5	0	5
Madrid	0	0	0	1	1	0,5	1	0	0	0	0	0	3,5
Murcia	1	1	1	0,5	0	1	1	0	0	0	0	0	5,5
Navarra	0,5	0,5	0,5	1	0	1	0	1	1	1	0,5	0	7
País Vasco	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	0,5	0,5	0	9,5
La Rioja	1	1	1	1	0	0,5	1	1	1	1	0,5	0	9
Ceuta/Melilla	0	0	0	1	0	0	1	0,5	0	0	0	0	2,5
Fuente: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, fecha de elaboración 1 de junio de 2011.													

Tabla 7. Regiones gobernadas por el PSOE	
Regiones	Puntuación
Andalucía	7
Aragón	9
Asturias	3
Baleares	4,5
Extremadura	5
País Vasco	9,5
Fuente: Elaboración propia a través de los datos facilitados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.	

Tabla 8. Regiones gobernadas por el PP	
Regiones	Puntuación
Castilla y León	9,5
Valencia	1,5
Galicia	5
Madrid	3,5
Murcia	5,5
La Rioja	9
Ceuta	4
Melilla	4
Fuente: Elaboración propia a través de los datos facilitados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.	

Tabla 9. Regiones gobernadas por otros partidos políticos que no son ni el PSOE ni el PP	
Regiones	Puntuación
Cataluña	7,5
Canarias	0,5
Cantabria	7
Navarra	7
Fuente: Elaboración propia a través de los datos facilitados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.	

Tabla 10. Evolución histórica de la Escala de Valoración de la implantación y desarrollo de la ley						
CCAA	Dic 08	Jun 09	Ene10	Jun 10	Ene 11	Jun11
Andalucía	8	8,5	8	8	7,5	7
Aragón	8	7	7,5	8,5	8,5	9
Asturias	6,5	7	5,5	5	4	3
Baleares	3,5	6	3	3,5	4	4,5
Canarias	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Cantabria	5,5	5	6,5	6,5	6,5	7
Castilla y León	8	8	7	8,5	9	9,5
Castilla-La Mancha	6	8	8	8,5	9	9,5
Cataluña	5,5	5,5	5	5,5	6,5	7,5
Valencia	2,5	3,5	0	2	2	1,5
Extremadura	4	4	4	3,5	5	5
Galicia	6	5,5	5	5,5	5,5	5
Madrid	2,5	3	2	2	2	3,5
Murcia	2	0,5	1	3,5	5	5,5
Navarra	6,5	7,5	7	7	7	7
País Vasco	7,5	8,5	8	8	8,5	9,5
La Rioja	6,5	8	8	7,5	8	9
Ceuta/Melilla	5,5	6	3,5	3,5	3	4
Fuente: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, fecha de elaboración 1 de junio de 2011.						

Tabla 11. Regiones en las que la aportación es superior a la que realiza la Administración General del Estado (AGE)			
CCAA	Aportación AGE %	Aportación CCAA %	Puntuaciones obtenidas
País Vasco	36	64	9,5
La Rioja	39	61	9
Andalucía	46	54	7
Fuente: Elaboración propia a través de datos del SAAD.			

Tabla 12. Regiones en las que la aportación es igual a la que realiza la Administración General del Estado (AGE)

CCAA	Aportación AGE %	Aportación CCAA %	Puntuaciones obtenidas
Cataluña	50	50	7,5
Ceuta/Melilla	50	50	4

Fuente: Elaboración propia a través de datos del SAAD.

Tabla 13. Regiones en las que la aportación es inferior a la que realiza la Administración General del Estado (AGE)

CCAA	Aportación AGE %	Aportación CCAA %	Puntuaciones obtenidas
Baleares	53	47	4,5
Navarra	54	46	7
Castilla-La Mancha	56	44	9,5
Aragón	58	42	9
Murcia	58	42	5,5
Castilla y León	60	40	9,5
Extremadura	61	39	5
Cantabria	61	39	7
Asturias	64	36	3
Galicia	73	27	5
Madrid	74	26	3,5
Valencia	85	15	1,5
Canarias	90	10	0,5

Fuente: Elaboración propia a través de datos del SAAD.